

LEY DE CREACION DE TRIBUNALES DEL TRABAJO QUE HA PROMULGADO EL P.E.

Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de

LEY

Artículo 1° — Continuará en vigor con fuerza de ley, a partir de la fecha de su publicación, el Decreto-Ley 32.347/44, que se transcribe a continuación, dictado el 30 de Noviembre de 1944, relativo a la creación de los Tribunales del Trabajo:

DECRETO 32.347/44

Creación de los tribunales del trabajo

Buenos Aires, 30 de Noviembre de 1944.

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, DECRETA:

CAPITULO I

Organización y competencia

Artículo 1° — En la capital de la República, la justicia del trabajo se ejercerá por la Comisión de Conciliación, las de arbitraje, los jueces de primera instancia y la Cámara de Apelaciones. Su organización, competencia y procedimiento se regirán por las normas que el presente decreto establece.

Art. 2° — La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada, y su competencia es improrrogable.

Art. 3° — Serán de competencia de la jurisdicción del trabajo las causas que se susciten entre empleadores y trabajadores por conflictos de derecho, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje o de ajuste de servicios, y todas aquellas otras, contenciosas, en que se ejerciten acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo.

Art. 4° — Será competente para conocer en la causa, el juez del lugar del trabajo, el del domicilio del demandado o el del lugar donde se hubiera celebrado el contrato, a elección del demandante.

Art. 5° — La Comisión de Conciliación estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y el número de vocales que determine la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentino, nativo, mayores de 25 años, con título de abogado, escribano o procurador, y tener especial versación en derecho del trabajo. El presidente y vicepresidente deberán tener título de abogado.

Art. 6° — La comisión de arbitraje se constituirán, en cada caso, con el presidente o vicepresidente de la Comisión de Conciliación, y con un representante patronal y otro obrero, elegido por las partes. Actuará como secretario el vocal de la Comisión de Conciliación que el presidente designe.

Art. 7° — Los representantes patronales y obreros deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentino, mayores de 25 años, de notoria buena conducta, saber leer y escribir, ejercer actividad de la misma especialidad que la de las partes y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Art. 8° — Las comisiones de arbitraje entenderán en los casos en que las partes, de común acuerdo, decidieran someter a su resolución los conflictos de derecho motivados por rebaja de la remuneración o modificación de las condiciones de trabajo.

Art. 9° — La Secretaría de Trabajo y Previsión, organizará el funcionamiento de la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, de acuerdo a las prescripciones del presente decreto.

Art. 10. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones serán nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a

NORMAS Y GARANTIAS EN CASO DE ACCIDENTES

propuesta, en terna, de la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado, mayores de treinta años, haber ejercido en el país durante cuatro años su profesión o desempeñado por igual término empleo judicial y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 11. — Los jueces de primera instancia prestarán juramento ante la Cámara de Apelaciones, y los miembros de ésta, ante su propio seno.

Art. 12. — Los jueces de primera instancia y los miembros de la Cámara de Apelaciones durarán en sus funciones mientras observen buena conducta, y sólo podrán ser removidos por las mismas causas establecidas para los demás magistrados judiciales de la Nación, sobre denuncia formal y escrita de cualquier interesado, y en virtud de sentencia fundada de un tribunal compuesto por dos vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y un vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, designados por sorteo.

La denuncia deberá ser deducida ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil en turno, la que, si la estima revestida de seriedad, la someterá al juicio del expresado tribunal.

Art. 13. — De la denuncia se dará vista al acusado por seis días, y vencido el término hubiere o no contestación, se convocará a las partes a una audiencia con intervalo de diez días.

Las partes podrán ofrecer pruebas y pedir las medidas necesarias para producir las mismas en la audiencia expresada.

El juez acusado podrá ser suspendido desde la presentación de la denuncia.

La sentencia se dictará dentro de los diez días de recibida la prueba y, si fuese condenatoria, sólo tendrá por efecto dejar cesante al juez.

Art. 14. — En la Capital de la República habrá veinte jueces de primera instancia. Cada juzgado tendrá un secretario, que deberá reunir las siguientes condiciones: ser argentino nativo, abogado, escribano o procurador, mayor de 25 años y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 15. — La Cámara de Apelaciones estará compuesta de un presidente, un vicepresidente y cinco vocales. El presidente y vicepresidente serán elegidos anualmente por mayoría de votos, no pudiendo ser reelectos sino con intervalos de un período.

Art. 16. — La cámara funcionará dividida en tres salas. Cada sala estará compuesta por el presidente de la cámara y dos vocales, y hará tribunal con el total de sus miembros, pudiendo actuar con dos, en el caso de que no hubiere discrepancia.

Art. 17. — La cámara se reunirá en pleno para unificar la jurisprudencia cuando cualquiera de las salas entendiera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o de la doctrina aplicable.

Art. 18. — La cámara tendrá tres secretarios, que deberán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, mayores de 25 años, abogados y tener especial versación en derecho del trabajo.

Art. 19. — La Cámara de Apelaciones conocerá:

- De los recursos de apelación que se interpongan contra las sentencias de los jueces de primera instancia;
- De los recursos de apelación que se interpongan en los casos autorizados por las leyes de previsión social;
- De los recursos que autoriza el artículo 6° de la ley 11.570;
- De los recursos de queja y retardo de justicia;
- De las recusaciones de sus propios miembros y de los jueces de primera instancia;

f) De los recursos de nulidad interpuestos contra las resoluciones de las comisiones de arbitraje.

Art. 20. — El Ministerio Público del Trabajo será desempeñado por un procurador general del trabajo y el número de representantes que determine la reglamentación respectiva.

El procurador general del trabajo y los representantes del ministerio público deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los jueces y secretarios de primera instancia, respectivamente.

Art. 21. — Corresponde al ministerio público en esta jurisdicción:

- Representar y defender los intereses fiscales;
- Intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o juntamente con los representantes de aquellos;
- Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que deban aplicarse los tribunales del trabajo, pidiendo el remedio de los abusos que notare;
- Ser parte necesaria en todas las causas del trabajo y en las contiendas de jurisdicción y competencia;
- Representar a la caja de garantía creada por la ley 9.688, en todas las jurisdicciones.

Art. 22. — La Secretaría de Trabajo y Previsión organizará el Ministerio Público del Trabajo y dictará las normas reglamentarias con sujeción a las cuales deberá ejercer sus funciones.

Art. 23. — Los miembros de la Cámara de Apelaciones y los jueces de primera instancia no podrán ser recusados sin causa, y regirán para los mismos las causales de incompatibilidad, excusación y recusación establecidas para los magistrados del fuero ordinario de la Capital Federal.

Art. 24. — En los casos de recusación, licencia u otro impedimento, los jueces se reemplazarán recíprocamente en la forma que establezca la Cámara de Apelaciones.

Art. 25. — En caso de licencia u otro impedimento, los secretarios serán reemplazados por otro empleado del tribunal del trabajo, que deberá reunir las condiciones exigidas para el titular.

Art. 26. — La Cámara de Apelaciones llevará un registro de peritos y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir a los efectos de su inscripción. Los nombramientos de oficio deberán recaer en los peritos inscriptos, quienes no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo pena de exclusión del registro.

Art. 27. — La Secretaría de Trabajo y Previsión formará una lista de expertos, patronales y obreros, de cada una de las actividades a que se refiere el Decreto del Poder Ejecutivo 16.116, de fecha 16 de enero de 1933.

Art. 28. — Los expertos que se designen deberán aceptar el cargo, haciéndose pasibles, en caso de negativa infundada, de una multa de veinte a cien pesos, que impondrá el juez. No percibirán honorarios por su actuación, pudiendo el juez determinar, según los casos, una suma compensatoria de los salarios dejados de percibir como consecuencia de su desempeño.

Art. 29. — Los miembros de la Cámara de Apelaciones, jueces de primera instancia, vocales de la Comisión de Conciliación y secretarios, no podrán desempeñar ningún otro empleo público o privado, ni ejercer su profesión.

Art. 30. — Las prohibiciones consignadas en el artículo anterior regirán para los empleados de la Cámara de Apelaciones

nes y juzgados de primera instancia.

Art. 31. — La Cámara de Apelaciones nombrará a sus secretarios y demás personal.

Los secretarios y empleados de los juzgados de primera instancia serán nombrados por la cámara, a propuesta de los jueces respectivos.

Art. 32. — La Cámara de Apelaciones ejercerá superintendencia sobre los jueces de primera instancia y Comisión de Conciliación.

CAPITULO II

Procedimiento

Art. 33. — El procedimiento será verbal y actuado e impulsado de oficio por los jueces.

Art. 34. — Todos los términos serán improrrogables y perentorios; correrán desde el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación. No se contarán los días inhábiles.

Art. 35. — Ante los jueces y Cámara de Apelaciones, las partes podrán ser representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley 10.996.

Exista o no representación, la asistencia letrada será obligatoria ante la Cámara de Apelaciones.

Ante la Comisión de Conciliación y las de arbitraje, las partes deberán comparecer personalmente, pudiendo, en caso de impedimento, ser representadas:

- Por parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- Tratándose de empleados u obreros, por compañeros de trabajo;
- Tratándose de asociaciones, sociedades o empresas, la representación podrá ser ejercida por sus directores, asociados, gerentes o empleados superiores con poder suficiente.

Art. 36. — La representación en juicio podrá ejercerse por carta poder, que se otorgará ante el presidente de la Comisión de Conciliación o secretario de juzgado de primera instancia, previa justificación de la identidad del interesado, y deberá ser firmada por el funcionario y el otorgante. En caso de impedimento, podrá firmar cualquier persona hábil a ruego del otorgante.

Art. 37. — Los menores adultos tendrán la misma capacidad de los mayores de edad para estar en juicio y podrán otorgar mandato en la forma prescripta en el artículo anterior, previa autorización del Ministerio Público del Trabajo.

Art. 38. — Toda persona que actúe en la jurisdicción del trabajo deberá en su primera presentación, constituir domicilio legal dentro del límite de la Capital Federal, en el que se practicarán todas las diligencias que se ordenen. El domicilio así constituido será válido para todos los efectos legales mientras no sea substituido.

Art. 39. — Todas las resoluciones serán notificadas por nota. Las sentencias y las citaciones a las audiencias de conciliación y de prueba se notificarán por despacho telegráfico, que podrá ser colacionado. En la notificación de la sentencia se transcribirá solamente la parte dispositiva.

Art. 40. — Las providencias quedarán notificadas por nota al siguiente día hábil de ser dictadas.

Art. 41. — Las partes actuarán en papel simple.

Cuando el empleador sea condenado en costas, deberá reponer todas las actuaciones. Si se declararan las costas por su orden, repondrá las de su parte.

Los trabajadores y sus derechohabientes estarán exentos de reponer el sellado.

Art. 42. — Los jueces darán audiencia pública diariamente durante seis horas, con excepción de los sábados, que lo harán durante tres horas.

Art. 43. — Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles, siendo facultad del juez habilitar a ese efecto días y horas cuando lo considere necesario.

Art. 44. — Las audiencias comenzarán a la hora designada, no teniendo los

citados obligación de esperar siné media hora.

Art. 45. — En caso de muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las acciones que sean de competencia de la jurisdicción del trabajo se iniciarán o continuarán en esa jurisdicción a cuyo efecto deberá notificarse a los respectivos representantes legales.

I. — Procedimiento ante la Comisión de Conciliación

Art. 46. — La demanda deberá interponerse ante la Comisión de Conciliación, la que, con las manifestaciones del compareciente, labrará acta, en la que se consignará:

- a) El nombre, apellido y domicilio del actor y del demandado;
- b) Los hechos y el derecho en que se funda;
- c) La cosa demandada.

Art. 47. — A fin de que el demandado conteste la demanda, oponga excepciones si las tuviere, y las partes ofrezcan sus pruebas, la Comisión de Conciliación fijará audiencia, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días.

Art. 48. — Las partes serán citadas para concurrir personalmente a la audiencia a que se refiere el artículo anterior.

La demandada será notificada de su obligación de contestar la demanda y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 62 y 130.

Art. 49. — La notificación se practicará en el domicilio asignado al demandado por el actor. Si fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado, a costa del demandante.

Art. 50. — La notificación de la audiencia a que se refiere el artículo 47, deberá ser practicada con una anticipación no menor de dos días.

Art. 51. — Si el demandado se domiciliase fuera de la jurisdicción de la Capital Federal, la notificación se efectuará en la forma establecida en el artículo 39.

Si no concurriese, se practicará la notificación por la autoridad judicial que corresponda a su domicilio, mediante carta rogatoria, cuyo libramiento se solicitará del juez en turno.

Art. 52. — En el caso previsto en el artículo anterior, la audiencia se fijará con la anticipación necesaria, y el demandado podrá comparecer personalmente o por medio de apoderado.

Art. 53. — Acreditada fehacientemente la ignorancia del domicilio del demandado, se le citará por edictos, que se publicarán, por tres días consecutivos, en el Boletín Judicial, sin cargo para el trabajador.

Si vencido el término de la citación, el empleado no compareciere, el juez en turno le designará defensor ad hoc.

Art. 54. — Las audiencias se celebrarán ante la Comisión de Conciliación, la que, abierto el acto, ilustrará a las partes sobre el alcance del procedimiento conciliatorio y propondrá una fórmula de solución.

Art. 55. — Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos por el patrono, no podrá proponerse a las partes soluciones transaccionales.

Art. 56. — La Comisión de Conciliación, a pedido de ambas partes, prorrogará la audiencia para nueva fecha, que designará al efecto.

Art. 57. — Los acuerdos conciliatorio o transaccionales celebrados por las partes ante la Comisión de Conciliación, pasarán en autoridad de cosa juzgada y, en caso de incumplimiento, se seguirá el procedimiento señalado para la ejecución de sentencia.

Art. 58. — En caso de no obtenerse una solución conciliatoria, el demandado deberá, en la misma audiencia, contestar la demanda y oponer excepciones, si las tuviere.

Art. 59. — Si el actor modificare los términos de la demanda, en cuanto a los hechos en que se fundamenta, a solicitud del demandado, se señalará nueva audiencia en el mismo acto, quedando las partes notificadas.

Art. 60. — Las partes ofrecerán sus pruebas en el acto de la audiencia a que se refiere el artículo 47, por escrito, dentro del término perentorio de tres días de esa audiencia, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo. Vencido dicho término, se elevarán las actuaciones al juez en turno.

Art. 61. — Se aceptarán como medios de prueba los instrumentos, las informaciones o declaraciones de testigos, los dictámenes de peritos, la inspección ocular, la confesión y las presunciones e indicios.

Art. 62. — Si el demandado, debidamente citado, no concurre a la audiencia sin justa causa, o se negare a contestar la demanda, se presumirán como ciertos,

salvo prueba en contrario, los hechos alegados por el actor.

Art. 63. — Sólo son admisibles como excepciones, la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería de las partes o sus representantes, la litispendencia en otro juzgado o tribunal competente, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción.

Art. 64. — En la audiencia a que se refiere el artículo 47, al contestar la demanda, deberán oponerse las excepciones; éstas deberán contestarse en el mismo acto o dentro de dos días. La prueba deberá ofrecerse dentro del término a que se refiere el artículo 60.

II. — Procedimiento judicial

Art. 65. — Recibidas las actuaciones, el juez designará una audiencia pública, que deberá celebrarse dentro de los diez días. La citación será practicada con una anticipación no menor de dos días, debiendo las partes concurrir personalmente con la prueba ofrecida.

Art. 66. — En la audiencia a que se refiere el artículo precedente el juez, antes de recibir la prueba que haga a lo principal, examinará la de las excepciones, resolviendo el acto continuo sobre su aceptación o rechazo.

La decisión será apelable juntamente con la sentencia en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Art. 67. — El juez deberá disponer las diligencias necesarias para que la prueba ofrecida pueda subsanciarse en una sola audiencia. En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes.

Art. 68. — Cuando el juez estimare improcedente alguna medida de prueba ofrecida por las partes, podrá denegar su producción mediante resolución fundada, la que será apelable juntamente con la sentencia en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Art. 69. — El que deba absolver posiciones será citado por lo menos con dos días de anticipación por despacho telegráfico, bajo apercibimiento de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda o contestación, salvo prueba en contrario. De este medio probatorio podrán usar las partes una sola vez.

Cuando las partes intervinieren personalmente, serán citadas en el domicilio legal que hubieren constituido; si lo hicieren por medio de apoderados, la citación se hará en el domicilio real.

Art. 70. — Cuando se trate de sociedades anónimas podrán absolver posiciones, además de sus representantes legales, los directores o gerentes con mandato suficiente.

Art. 71. — En las audiencias de prueba, las partes podrán ser asistidas por letrado.

Art. 72. — El juez interrogará personalmente a las partes bajo pena de nulidad y sólo hará constar en el acta las declaraciones que sean pertinentes.

Art. 73. — Si las partes interrogadas por el juez respecto de hechos que les son personales, adujeren ignorancia, contestaren en forma evasiva o se negaren a contestar, podrá estimarse esa actitud como una presunción a favor de los hechos alegados por la contraparte, en cuanto se relacionen con el contenido de la pregunta.

Art. 74. — El juez, cuando lo considere necesario podrá requerir el asesoramiento de expertos, pudiendo disponer su concurrencia a la audiencia de prueba.

Art. 75. — Podrán ser testigos, todas las personas mayores de catorce años. Su número no podrá exceder de cuatro por parte. Si la naturaleza del juicio lo justificare, podrá admitirse un mayor número de testigos.

Art. 76. — Los testigos serán citados por intermedio de la autoridad policial, haciéndoles conocer las penalidades de que se harán pasibles en el caso de no comparecer sin justa causa. Si no comparecieren se designará nueva audiencia, la que se celebrará dentro de los tres días siguientes, disponiéndose su comparecencia por la fuerza pública. No habiendo justificado su inasistencia se harán pasibles de una multa que impondrá el juez, la que no podrá exceder de cien pesos en cada caso.

Art. 77. — No podrán ser presentados como testigos contra una de las partes, sus consanguíneos o afines en línea directa, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente.

Art. 78. — El juez examinará a los testigos previo juramento de decir verdad, haciéndoles saber las disposiciones contenidas en el Código Penal sobre falso testimonio. Deberán dar razón de sus dichos y si no lo hicieren, el juez lo exigirá.

Art. 79. — El juez podrá, a petición de parte o de oficio, proceder al careo de los testigos.

Art. 80. — Si la declaración del testigo ofreciere indicios graves de falso testimonio o de soborno, el juez podrá decretar de inmediato su detención, poniéndolo a disposición del juez del crimen, con remisión de los testimonios que estime pertinentes.

Art. 81. — Las partes podrán tachar a los testigos por motivo fundado en inhabilidad o en hechos que hicieren presumir la parcialidad de su declaración y el juez al dictar sentencia, apreciará el valor de las mismas.

La prueba de las tachas deberá producirse dentro de los dos días de deducidas.

Art. 82. — Las partes deberán agregar toda la prueba instrumental de que intenten valerse, dentro del término a que se refiere el artículo 60; no teniendo la a su disposición las mencionarán con la individualidad posible dentro de ese término, expresando lo que de ella resulte y designando el lugar en que se encuentre.

Art. 83. — Todo aquel contra quien se presente en juicio un documento privado que se le atribuya, está obligado a declarar si es o no suya la firma.

Negada su autenticidad, si la parte que lo ha presentado insiste en su validez, se procederá al examen pericial.

Art. 84. — Cuando el juez lo crea necesario, podrá trasladarse al local del trabajo a fin de constatar de visu las circunstancias que considere apreciables como elementos de juicio.

Art. 85. — Cuando la comprobación de los hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia o industria, se procederá al nombramiento de peritos.

Art. 86. — Los peritos serán nombrados de oficio en todos los casos, pudiendo su número variar de uno a tres, a juicio del magistrado, y de acuerdo con la índole o monto del asunto objeto de la pericia.

Art. 87. — Los peritos podrán ser recusados hasta dos días después de su nombramiento por las causas establecidas para los jueces.

Art. 88. — El juez podrá disponer, cuando lo considere necesario, que las pericias se practiquen por profesionales o técnicos dependientes de la administración nacional.

Art. 89. — Producida la prueba, redactada y firmada el acta, las partes, por intermedio de sus letrados, podrán hacer una breve exposición verbal alegando sobre el mérito de la misma. Acto continuo el magistrado dictará sentencia pudiendo postergar su decisión por un término que no exceda de dos días.

Art. 90. — La sentencia deberá declarar el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo en todo o en parte, debiendo fundarse en el texto de la ley y a falta de éste en los principios de leyes análogas y en defecto de éstos en los principios generales del derecho. Suplen-do la omisión del demandante, el juez estará facultado para sentenciar ultra petita.

Art. 91. — La sentencia condenatoria determinará el plazo dentro del cual deberá procederse a su cumplimiento.

Art. 92. — La sentencia condenatoria traerá aparejada, aunque no se solicitare, la imposición de costas a la parte vencida.

El juez podrá eximir en el todo o en parte, de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.

Art. 93. — En los casos en que la iniciación y prosecución del juicio se haya debido a la negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados al acreedor por la demora en la percepción de sus haberes o en el goce de sus beneficios.

En ningún caso esa indemnización podrá ser superior a un veinte por ciento del monto de la condena.

Art. 94. — Las regulaciones de honorarios de letrados y apoderados no podrán importar más del veinte por ciento del valor del litigio.

Los honorarios pertenecen a los profesionales a favor de quienes han sido regulados.

Art. 95. — El juez, si lo pidiera alguna de las partes dentro del siguiente día hábil al de la notificación de la sentencia, podrá corregir cualquier error material, aclarar algún concepto obscuro sin alterar lo substancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.

Art. 96. — La sentencia y toda otra resolución que recaiga en asuntos en que el monto cuestionado no sea superior a mil pesos serán inapelables. Cuando el monto sea superior a esa suma podrá apelarse de la sentencia definitiva y de las resoluciones por las que se decida la procedencia o improcedencia de las excepciones.

El Ministerio Público de Trabajo, cualquiera sea el monto del juicio y en aten-

ción a la importancia de la cuestión de derecho debatida, podrá interponer recurso de apelación contra las sentencias y las resoluciones que deciden excepciones.

Art. 97. — El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los dos días de notificada la sentencia.

Art. 98. — Dentro de los tres días subsiguientes al de la interposición del recurso, el apelante deberá expresar agravios por escrito, con firma de letrado.

Art. 99. — Cumplido el requisito establecido en el artículo anterior, el juez concederá el recurso y correrá traslado de la expresión de agravios por el término de dos días.

El recurso será denegado cuando no se hayan expresado agravios, quedando firme la sentencia.

Art. 100. — Vencido el término a que se refiere el artículo anterior, se elevarán las actuaciones a la Cámara de Apelaciones.

Art. 101. — Recibidas las actuaciones, la cámara podrá decretar, de oficio, medidas para mejor proveer, y dictará sentencia en un plazo que no podrá exceder de diez días.

Art. 102. — En los casos a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 19, la cámara ajustará el procedimiento al que determinen las leyes especiales por las que se autorice el recurso de apelación.

Art. 103. — La sentencia será extendida en las actuaciones, dejándose copia en el libro destinado al efecto.

Art. 104. — Las resoluciones de la cámara serán promulgadas a mayoría absoluta de votos de los miembros de la sala que deba entender.

Art. 105. — Las sentencias serán notificadas a las partes en la forma prescrita por el artículo 39.

Art. 106. — Consentida o ejecutoriada la resolución de la cámara, se devolverán sin más trámite las actuaciones al juzgado de origen.

Art. 107. — Recibidos los autos en el juzgado de origen, el secretario practicará la liquidación correspondiente y se intimará el pago al deudor mediante despacho telegráfico.

No efectuando el pago dentro de los dos días se trabará embargo en bienes del deudor decretándose la venta de los mismos por el martillero que el juez designe, procediéndose en lo sucesivo de acuerdo con lo que establecen los artículos 509 y siguientes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

III. — Recurso de hecho

Art. 108. — El recurso de hecho deberá deducirse por escrito ante la Cámara de Apelaciones y su interposición no suspenderá la tramitación del juicio mientras el expediente no se eleve al superior. Podrá fundarse en retardo de justicia o en el rechazo del recurso de apelación.

Art. 109. — Cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito que el juez dicte sentencia cuando hubiere transcurrido el término a que se refiere el artículo 80. Si vencido el término de dos días de su presentación, no se hubiere dictado sentencia, se podrá deducir de queja ante la Cámara de Apelaciones acompañando copia simple del expresado escrito. Si la cámara lo considera procedente, dispondrá que el juez administre justicia dentro del término de dos días.

Si el magistrado desobedeciera la orden sin causa justificada, a juicio del superior, incurrirá en una multa de cien pesos que impondrá la cámara, pasándose los autos al juez que le sigue en orden de turno.

Art. 110. — Cuando el recurso se deduzca por apelación denegada, deberá interponerse dentro de dos días y acompañarse copia simple de la providencia recurrida. La cámara dispondrá la elevación de los autos y declarará bien o mal denegado el recurso.

IV. — Medidas precautorias

Art. 111. — Podrá decretarse, a petición de parte, embargo preventivo sobre los bienes del deudor:

- a) Cuando se justifique sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar bienes o que, por cualquier causa, se hubiere disminuido notablemente su responsabilidad, en forma que perjudique los intereses del acreedor y siempre que el derecho del peticionante surja verosimilmente de los extremos probados;
- b) Cuando exista sentencia favorable o confesión expresa o ficta de hechos que hagan presumir el derecho alegado;
- c) Que la existencia del crédito esté

justificada con instrumento público o privado atribuido al deudor, reconocida la firma por dos testigos.

Art. 112. — En todos los casos en que, habiendo lugar a embargo preventivo o definitivo, éste no pudiera hacerse efectivo por no encontrarse bienes del deudor, podrá solicitarse contra él inhibición general para vender o gravar sus bienes.

Art. 113. — Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes, por parte del emplendor, pudiera comprometer la efectividad de los derechos concedidos por las leyes del trabajo, el Ministerio Público si lo estimare conveniente podrá solicitar las medidas precautorias a que se refieren los artículos 111 y 112.

V. — Procedimiento arbitral

Art. 114. — Si las partes, en los casos previstos en el artículo 8, optasen por el procedimiento arbitral, lo manifestarán en la audiencia de conciliación suscribiendo en el mismo acto el respectivo compromiso en el que se establecerán la cuestión o cuestiones que se someten, señalándose la audiencia de prueba que deberá celebrarse dentro de los diez días.

Art. 115. — Serán condiciones esenciales del compromiso a las que deberán someterse las partes:

- a) Que el trabajador deba continuar en el desempeño de sus tareas aceptando provisionalmente las condiciones impuestas;
- b) Que si la modificación se declarare arbitraria o la rebaja injustificada, el empleador deje sin efecto la modificación o rebaja a partir de la notificación del fallo, reintegrando al trabajador el importe de los salarios que hubiere dejado de percibir como consecuencia de la modificación o rebaja;
- c) Que si la modificación o rebaja es justificada, el trabajador deberá aceptar las nuevas condiciones.

Art. 116. — Dentro de los tres días de realizada la audiencia de conciliación se designarán los representantes a que se refiere el artículo 63, mediante la presentación de un escrito donde conste la conformidad de los mismos para el desempeño del cargo, y a quienes se tendrán por nombrados previo juramento y justificación de las condiciones requeridas para su desempeño.

Si las partes no propusieran a sus respectivos representantes en el término expresado, la comisión procederá a nombrarlos de oficio, designándolos de la nómina de expertos a que se refiere el artículo 27.

Art. 117. — Las partes ofrecerán las pruebas de que intenten valerse dentro del mismo término fijado en el artículo anterior.

En todos los casos la totalidad de la prueba deberá ser substanciada en la audiencia respectiva e incumbir a las partes adoptar las medidas necesarias para ello. En caso contrario perderán el derecho de hacer uso de las mismas.

Art. 118. — Los miembros de la comisión nombrados por las partes o de oficio, podrán ser recusados dentro del día subsiguiente hábil al de su nombramiento, ante la misma comisión. Son casos de recusación:

- a) Tener interés directo en el asunto;
- b) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con alguna de las partes;
- c) Tener enemistad manifiesta con alguna de las partes, por hecho determinado.

La excusación deberá fundarse en las mismas causas.

Art. 119. — La comisión, con exclusión del miembro recusado, resolverá sin más trámite sobre la recusación interpuesta, siendo inapelable su resolución.

Art. 120. — Excluido un representante por excusación o recusación, la parte que lo propuso deberá designar reemplazante dentro de las 24 horas en la forma establecida en el artículo 116.

Art. 121. — El presidente y el secretario de la comisión de arbitraje podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces de primera instancia.

Art. 122. — La Comisión Arbitral procederá sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir las pruebas que ofrezcan las partes, en la medida que lo estime necesario para la comprobación de los hechos.

Art. 123. — La comisión se constituirá el día y hora designado para la audiencia de prueba con la totalidad de sus miembros.

Art. 124. — Los representantes designados a propuesta de las partes o de oficio, que dejaren de concurrir sin justa causa a la constitución del tribunal, se harán pasibles de una multa de veinte o cien pesos moneda nacional, que aplicará el presidente.

Art. 125. — Producida la prueba, la

comisión dictará resolución dentro de un plazo que no excederá de dos días.

La resolución se limitará a expresar si la modificación impuesta está dentro de las facultades patronales o si la rebaja de la remuneración es o no justificada.

Art. 126. — Contra la resolución de la comisión de arbitraje no habrá otro recurso que el de nulidad, que no podrá fundarse sino en haberse resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o en haberlo hecho fuera del término legal.

El recurso se interpondrá dentro del tercer día de la notificación ante la comisión de arbitraje, la que elevará las actuaciones a la Cámara de Apelaciones, que resolverá sin más trámite.

Art. 127. — El compromiso cesa en sus efectos:

- a) Por la voluntad unánime de los que lo contrajeron;
- b) Por el transcurso del término legal establecido para dictar resolución.

CAPITULO III Disposiciones generales

Art. 128. — En cualquier estado de procedimiento se intentará avenir a las partes, mediante soluciones conciliatorias.

Art. 129. — Las autoridades judiciales y administrativas que integren el fuero del trabajo en el ejercicio de sus funciones, podrán imponer apercibimientos y multas hasta cincuenta pesos moneda nacional y aprestos de 24 horas, que podrán aumentarse hasta 48 horas en el caso de reincidencia, por las faltas que se cometieren en las audiencias y demás procedimientos, al respecto y consideración que les son debidos. Las medidas disciplinarias aplicadas por las comisiones de conciliación y arbitraje serán apelables ante el juez de primera instancia, y las impuestas por éste, ante la cámara.

El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de las 24 horas.

Art. 130. — Sin perjuicio de las penas establecidas en el presente decreto, la Cámara de Apelaciones, los jueces, la Comisión de Conciliación y las de Arbitraje, podrán imponer multas de diez a cien pesos a toda persona que debidamente citada no compareciera sin causa justificada.

Art. 131. — Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto en el presente decreto deberán ser satisfechas dentro de las 48 horas de su notificación y en caso de no hacerse efectivas se procederá de conformidad con lo que establece el artículo 10 de la ley 11.570.

Art. 132. — La Comisión de Conciliación y el Ministerio Público del Trabajo dependerán de la Secretaría de Trabajo y Previsión y sus miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la misma.

Art. 133. — La superintendencia a que se refiere el artículo 32 será ejercida por la Cámara de Apelaciones de acuerdo con lo que dispone el artículo 103 de la ley de organización de los tribunales de la Capital Federal.

Sobre la Comisión de Conciliación las facultades derivadas de la superintendencia sólo las ejercerá la cámara en cuanto a los actos de aquélla vinculados con el procedimiento judicial.

Art. 134. — En el procedimiento conciliatorio y arbitral se actuará en papel simple.

En el procedimiento judicial la representación deberá hacerse de acuerdo con lo que al respecto establezca la ley de sellos.

Los compromisos arbitrales así como los convenios resultantes de las soluciones conciliatorias no estarán sujetos a gravamen fiscal.

Art. 135. — Los apoderados y letrados de la Secretaría de Trabajo y Previsión, cuando ejerzan la representación y patrocinio de empleados y obreros podrán firmar sin estampilla fiscal, con cargo de reposición en el supuesto de percibir honorarios de los patronos demandados en virtud de condenación con costas.

Art. 136. — Los empleadores no podrán deducir suma alguna de los sueldos o salarios de sus empleados u obreros, cuando éstos se vean obligados a faltar e interrumpir sus tareas por citaciones de las autoridades del fuero especial del trabajo; en caso contrario se harán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 9 de la ley 11.278.

Art. 137. — En las cuestiones de competencia que se susciten se procederá en la forma prescrita en el título X del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Art. 138. — Los hechos en que se fundamenten las demandas que se deduzcan ante la jurisdicción del trabajo y que hayan dado lugar a resoluciones administrativas condenatorias de la Secretaría de Trabajo y Previsión en uso de sus facultades, serán terribles por ciertos, salvo prueba en contrario.

Art. 139. — A partir de la vigencia del decreto 21.425, las acciones derivadas de la ley 9.688 se tramitarán de acuerdo al procedimiento que el mismo establece, actuando como tribunal de apelación en la Capital Federal, la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción del trabajo.

Art. 140. — Quedan derogadas las disposiciones de la ley 12.713 en cuanto encomiendan a las comisiones de Conciliación y Arbitraje de la Capital Federal la substanciación y resolución de las cuestiones comprendidas en el artículo 22 de la misma.

CAPITULO IV Disposiciones transitorias

Art. 141. — Los juicios actualmente en trámite en otras jurisdicciones que sean de competencia de la que se crea por el presente decreto quedarán radicados en los tribunales de origen hasta su terminación.

Art. 142. — Por la primera vez, para los nombramientos a que se refiere el artículo 19, la Secretaría de Trabajo y Previsión hará las propuestas presentando de la forma el juramento de los miembros de la Cámara de Apelaciones, en esta oportunidad, se presentará ante el Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Art. 143. — La Cámara de Apelaciones tendrá un fiscal mayor, tres oficiales primeros, un habilitado, tres auxiliares, cinco escribenientes principales, cinco escribenientes, un mayordomo y cuatro ordenanzas.

Cada juzgado tendrá un auxiliar mayor, un auxiliar primero, un auxiliar, un escribiente principal, un escribiente y un ordenanza.

Habrá cuatro oficiales de justicia, que dependerán de la cámara.

Art. 144. — Este decreto comenzará a regir a partir del 1º de marzo de 1945.

Art. 145. — La Secretaría de Trabajo y Previsión adoptará las medidas necesarias para que los organismos creados por el presente decreto inicien su actuación en el término fijado en el artículo anterior.

Art. 146. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Art. 147. — Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.

FARRELL. — Juan Perón. — Rómulo Etcheverry Bonetto. — Alberto Teissaire. — Orlando L. Peluffo. — Juan Pistarini. — César Ameghino.

Art. 148. — Los magistrados y funcionarios que integran la Justicia del Trabajo gozarán de la misma jerarquía y retribución que los que integran la justicia ordinaria de la Capital Federal, a cuyo efecto se incluirán en el presupuesto de la Nación las partidas necesarias pagándose en el interior los sueldos correspondientes, de rentas generales.

Art. 149. — Ratifícase con fuerza de ley, a partir de su publicación, el decreto ley 21.425/44, que se transcribe, a continuación, dictado el 10 de Agosto de 1944, relativo a la institución de la instancia administrativa obligatoria para el resarcimiento de accidentes del trabajo:

DECRETO 21.425/44

Institución de la instancia administrativa obligatoria para el resarcimiento de accidentes del trabajo en todo el país.

Buenos Aires, 10 de agosto de 1944.

El Presidente de la Nación Argentina — en Acuerdo General de Ministros —

DECRETA:

CAPITULO I

Reglas de competencia

Artículo 1º — El resarcimiento de los infortunios del trabajo ocurridos en el territorio de la Nación, estará sujeto a las normas de procedimiento y garantías adicionales establecidas en el presente decreto.

Art. 2º — La Dirección de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión intervendrá en todos los accidentes que se produzcan en la Capital Federal, pertenezcan o no al régimen de la ley de accidentes del trabajo 9.688 y de su modificatoria 12.631. La misma intervención tendrán las delegaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión en las provincias y territorios, en los accidentes ocurridos en sus jurisdicciones. En la instancia administrativa las jurisdicciones territoriales atribuidas por este decreto son improrrogables.

Art. 3º — Dicha intervención tendrá

los alcances y se ajustará a las siguientes reglas:

1. En los accidentes sometidos a las leyes citadas en el artículo 2º, cuando no formule una reserva expresa sobre la obligación de indemnizar y entraña el caso, por consiguiente, la fijación del monto de la indemnización, la Dirección de Trabajo o las delegaciones regionales, según el caso, de oficio, realizarán todas las gestiones para su liquidación y resolución, la que, previa substanciación del recurso autorizado por el artículo 28, si fuera interpuesto, causará ejecutoria en los términos establecidos por las leyes de procedimiento de la jurisdicción que corresponda;
2. Cuando en los mismos casos se formule una reserva expresa sobre la obligación de indemnizar, se realizarán las gestiones establecidas en el artículo 5º, careciendo, en este caso, la intervención del alcance prescrito en el inciso anterior;
3. En los accidentes del trabajo no comprendidos en el régimen de las leyes citadas y que están protegidos por un seguro de los equiparados a las mismas, se procederá con las facultades acordadas por el inciso 1º, debiendo ajustarse para la liquidación a las disposiciones contractuales celebradas entre el patrono y la empresa aseguradora;
4. En los accidentes del trabajo no comprendidos en alguna de las situaciones ya previstas, sobre las cuales no exista seguro y que entrañen de consiguiente, una acción del derecho común, se intervendrá con las mismas facultades acordadas por el inciso 1º y se aplicará el criterio general de las leyes 9.688 y 12.631, en el caso que las partes, mayores de edad, voluntariamente, se sometan a su jurisdicción;
5. En la situación contemplada en el inciso 2º, las partes podrán someterse voluntariamente a la resolución que sobre todas las cuestiones planteadas dicte la autoridad del trabajo. Dicha resolución tendrá el alcance y efecto establecidos en el inciso 1º.

Art. 4º — Con excepción de los casos comprendidos en el inciso 2º del artículo anterior, y una vez radicados los procedimientos en la instancia administrativa, las partes no pueden ocurrir a otra jurisdicción, ni accionar por la vía del derecho común, ni aun de común acuerdo desistir o renunciar a ella ni recurrir a la vía judicial o arbitral. En caso de que los renunciantes sean el obrero o sus derechohabientes, se designará por la autoridad del trabajo el abogado que en su defecto debe proseguir las actuaciones y, en su caso, disponer el ingreso de la indemnización a los fondos de la caja de garantía.

Art. 5º — En el caso del inciso 2º, artículo 3º, se comunicará de inmediato al obrero o derechohabientes la reserva invocada para que procedan a iniciar acción judicial, pudiendo utilizar los servicios de profesionales de la autoridad del trabajo, los que serán prestados en forma gratuita. Las actuaciones, en este caso, se darán por finalizadas al conocerse que se ha iniciado juicio o, en su defecto, una vez reunidos antecedentes bastantes para establecer prima facie el monto y la procedencia de la indemnización.

Art. 6º — Si no obstante haber formulado expresa reserva sobre la obligación de indemnizar el patrono o asegurador, dispusieran entregar alguna indemnización al interesado, fuera de las que correspondan a su inhabilitación temporal, deberán efectuarla en la caja de accidentes, so pena de la sanción del artículo 9º de la ley 9.688 y, en su caso, las establecidas por este decreto.

Art. 7º — Producida la situación del artículo 5º si el interesado no dedujera acción judicial en el plazo de sesenta días, la autoridad del trabajo, estimando viable, dispondrá que se inicie de inmediato en representación de la caja de garantía. La indemnización que se obtenga en el juicio ingresará definitivamente a los fondos de esa caja, en la medida que el obrero o sus derechohabientes hubieran sido indemnizados por ajuste directo con transgresión de la ley.

Art. 8º — La manifestación desconociendo la obligación de indemnizar a que se refiere el artículo 3º, debe ser efectuada en la denuncia o en la primera presentación posterior que haga el patrono o subrogador, en términos claros y categóricos la manifestación efectuada fuera de esas oportunidades, ambigua, confusa, reticente, obscura o dubitativa, será interpretada en el sentido de que se acepta.

la obligación de indemnizar, como asimismo, cuando existan actos de sometimiento al procedimiento o, mediando requerimiento y emplazamiento al efecto, no se haga manifestación alguna.

Art. 9º. — El juez ante quien se deduzca demanda por indemnización de accidente del trabajo, no la admitirá sin la presentación de un certificado de la autoridad del trabajo competente en el que conste que el demandado ha formulado la reserva del artículo 3º, inciso 2º y concordantes de este decreto, bajo pena de nulidad.

CAPITULO II

Procedimiento

Art. 10. — El procedimiento será en todos los casos de oficio. La autoridad del trabajo que tenga a su cargo el trámite podrá disponer en cualquier estado, las diligencias que estime convenientes para suplir la insuficiencia de los elementos probatorios.

Art. 11. — Los obreros damnificados o sus parientes deberán hacer la denuncia del accidente, ante los funcionarios del trabajo o policiales dentro de los treinta días de ocurrido o de haber llegado el hecho a su conocimiento. Los patronos deberán efectuarla dentro de las veinticuatro horas contadas desde el momento en que se informaron del accidente. Igual obligación de formularla tendrán las compañías de seguros dentro del plazo de tres días de haberle sido denunciado el accidente, bajo pena de las sanciones establecidas en los artículos 46 y 47 de este decreto. Se presume que el patrono o sus agentes han tomado conocimiento del accidente en la Capital Federal y en las provincias o territorios a las cuarenta y ocho horas. El denunciante podrá munirse de una constancia que se otorgará en salvaguarda de su responsabilidad. La misma obligación tendrán los funcionarios públicos que en razón de sus cargos tuvieren conocimiento de un accidente del trabajo.

Art. 12. — La denuncia deberá contener indefectiblemente: nombres, apellido y domicilio del accidentado y del patrono, lugar y fecha del accidente, clase de industria o establecimiento donde ocurrió y opinión facultativa sobre el carácter de las lesiones. La denuncia que no contenga estos requisitos se tendrá por no verificada a los efectos de las sanciones previstas en el artículo 25 de la ley 9.688, sin perjuicio de su recepción por las autoridades y de que se le imprima el curso previsto en el presente decreto.

Art. 13. — La denuncia será hecha ante la autoridad del trabajo o autoridades policiales del lugar del hecho. Recibida la denuncia por la policía, la entregará bajo recibo o la comunicará por vía telegráfica o postal certificada a la autoridad del trabajo de la respectiva jurisdicción, dentro del tercero día.

Art. 14. — En posesión de la denuncia la autoridad del trabajo competente procederá de acuerdo con las reglas siguientes:

1. Si prima facie el accidente no reviste importancia, se practicarán las diligencias necesarias para establecer si el patrono o seguro proporcionaron a la víctima las prestaciones establecidas en los artículos 8º inciso d) y 26 de la ley 9.688. En este caso, quedando efectivamente sin incapacidad el obrero y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el apartado anterior, se comunicará a las partes que al año de la fecha del alta médica, no mediando reclamo, se archivarán las actuaciones, con la advertencia de que esta resolución tendrá fuerza de cosa juzgada;
2. Si prima facie el accidente reviste importancia, se organizarán de inmediato actuaciones produciéndose por los medios más adecuados una investigación prolija del hecho, con todos los antecedentes relativos a la víctima, las condiciones en que cumplía el trabajo, datos personales de los causahabientes y grado de parentesco, indicándose si vivían bajo el amparo y con el producido del trabajo de la víctima. Se consignarán también los nombres y domicilios de los testigos del hecho y el informe del facultativo asistente, con todas las especificaciones del artículo 16 y con la indicación de si fué designado por el obrero, patrono o seguro. Si hay seguro se indicará el nombre y domicilio de la compañía aseguradora y el género y límite de los riesgos patronales que tiene a su cargo.

En este caso se exigirá el cumplimiento de las obligaciones del inciso 1º de este artículo en las oportunidades legales.

Art. 15. — Suscitándose divergencias sobre la fecha del alta médica del obrero, se solicitará de las partes ofrezcan y produzcan la prueba que tengan en apoyo de sus manifestaciones, fijándose plazo para su presentación. Si emplazada a esos efectos, alguna de las partes no presentara pruebas, se estará a lo manifestado por la otra, apreciándose esta circunstancia prudencialmente por la autoridad de decisión.

Art. 16. — Los informes médicos a que se refiere el inciso 2º del artículo 14 serán ilustrativos de las lesiones, conteniendo fecha del alta médica si se hubiere otorgado y, en caso contrario, pronóstico y tiempo aproximado que aún necesitará la cura del obrero. Si estuviere curado indicará precisamente si queda con incapacidad permanente, como así las condiciones generales de salud del damnificado y, en lo posible, sus aptitudes para el trabajo. Debiendo proseguir tratamiento, expresará el indicado para la curación y restitución de las funciones de la víctima.

Art. 17. — Las diligencias del artículo 14 inciso 2º, serán realizadas por el funcionario del trabajo o policial dentro de los cinco días de concluido. Si no se hubieran concluido dentro del plazo indicado, el instructor informará sobre las causas del impedimento a la autoridad del trabajo. Si para el diligenciamiento debiera requerirse por razones de jurisdicción o de distancia, la intervención de otros funcionarios, lo hará así comunicándolo en el día a la autoridad que lo comisionó, debiendo hacer igual comunicación la autoridad en quien se delega el trámite.

CAPITULO III

Peritajes médicos

Art. 18. — El examen del obrero accidentado o víctima de una enfermedad profesional, a los efectos de dictaminar sobre su incapacidad para el trabajo, se realizará por una junta de médicos integrada por un facultativo oficial y uno por cada parte, pero no obstará a la realización y validez del informe la no concurrencia de médicos de las partes.

Art. 19. — Habiendo sido dado el alta médica la junta se convocará para dentro de los ocho días de conocida esa circunstancia por la autoridad del trabajo. El examen en consecuencia, responderá toda vez que dicha autoridad lo crea conveniente, cuando de las constancias actuariales surja que la víctima queda sin incapacidad para el trabajo.

Art. 20. — En caso de surgir disidencia, sin perjuicio de formalizarse ésta por escrito en el acto de la celebración del reconocimiento en consulta, los médicos intervinientes, con el asentimiento de facultativo oficial, podrán producir sus informes hasta tres días después.

Art. 21. — Producida la disidencia se realizará un segundo peritaje exclusivamente por médico o médicos oficiales que no hayan emitido opinión. Los médicos de las partes podrán asistir a este examen al solo efecto de ilustrar al facultativo oficial, pero sin emitir dictamen. En la citación al primer reconocimiento se transcribirá este artículo y el 18º.

Art. 22. — Las pericias médicas serán aplicativas de todas las circunstancias que se hayan ponderado para valorar la incapacidad, y la autoridad de decisión apreciará estas conclusiones periciales confrontándolas con las demás circunstancias particulares del caso y las normas doctrinarias y jurisprudenciales ilustrativas de la legislación sustantiva aplicable. Cuando sea del caso, se indicará, además, en los informes médicos el tratamiento posterior indicado para la recuperación o readaptación profesional del accidentado.

Art. 23. — Los reconocimientos médicos se realizarán en los servicios que organice la Secretaría de Trabajo y Previsión, o en los hospitales y establecimientos sanitarios dependientes directa o indirectamente de la Nación, de las provincias o municipalidades, o que reciban subvención de las mismas, sin perjuicio de que se realicen en el lugar donde se asistió el obrero, si así conviene a su estado.

Art. 24. — No se permitirán peritajes de médicos interesados o al servicio de compañías de seguros, sino cuando actúen en representación de las partes. Los designados, en el acto de la pericia, manifestarán si están comprendidos en la inhabilidad. En caso de omisión o de falsedad el dictamen quedará invalidado, además de la prohibición para el infractor de intervenir en lo sucesivo como perito en actuaciones de esta naturaleza.

Art. 25. — La Secretaría de Trabajo y Previsión, para su mejor aplicación, reglamentará las disposiciones de este capítulo y procederá dentro de los noventa

días la creación de una clínica de trabajo para la cura de obreros accidentados o víctimas de enfermedades profesionales, como así también para los fines del artículo 22, último apartado.

CAPITULO IV

Resolución

Art. 26. — Reunidos los antecedentes para proceder a la liquidación, se dará vista a las partes por un término de cinco días a contar de la notificación, el que, en casos excepcionales, podrá ser ampliado hasta diez, para que, por nota o personalmente, manifiesten lo que vieren convenientes en apoyo de sus derechos y para que ofrezcan en la misma oportunidad la prueba de que dispongan, la que será recibida en los diez días subsiguientes.

Art. 27. — Vencido el término de la vista sin que las partes hagan uso del derecho acordado en el artículo anterior, o substatuado la prueba ofrecida, el expediente quedará en estado de resolución, la que será dictada por el director de Trabajo o delegados regionales, dentro de los cinco días, sin perjuicio de las diligencias que se dispongan en ejercicio de las atribuciones que establece el artículo 10 de este decreto.

CAPITULO V

Recursos

Art. 28. — La resolución del artículo anterior es apelable, dentro de los cinco días de notificada, ante el juez de primera instancia en lo civil o comercial, o el tribunal o juez de apelación de la Justicia de Paz Letrada, donde la hubiere, de acuerdo con las reglas de competencia que por el fuero y el monto se encuentren establecidas en las leyes procesales y de organización de la justicia ordinaria en la jurisdicción respectiva.

Art. 29. — Las apelaciones previstas por este decreto serán deducidas en todos los casos ante la autoridad del trabajo respectiva, por acta, por vía postal o telegráfica. La autoridad del trabajo procederá, dentro de las 24 horas, a remitir el expediente al superior, quien llamará autos para resolver dentro del tercero día, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 30. — Las partes podrán fundar el recurso al deducirlo y el tribunal de apelación no admitirá escritos, memorias, ni otros elementos. Sólo podrá disponerse, con el carácter de medida para mejor proveer, una audiencia a realizarse dentro de los cinco días, para que las partes expongan lo que haga a sus derechos. En este último caso, el juez dictará sentencia dentro de las 24 horas de realizada la audiencia y el tribunal en el primer acuerdo. Si la audiencia no se realizara por incomparecencia de ambas partes, se resolverá dentro del mismo término.

Art. 31. — Si, en el curso de la tramitación, alguna de las partes se considerase agraviada por una resolución de la autoridad del trabajo, podrá interponer, en el plazo de 48 horas, el recurso de apelación preventiva, para ser resuelta juntamente con el recurso previsto por el artículo 28. La interposición de tal recurso implica la no aceptación de la medida impugnada y el sometimiento de la cuestión al superior, quien, al resolver lo principal, resolverá lo accesorio. Si se hiciera lugar a la apelación preventiva, el superior subsanará lo que hubiere sido motivo de agravio y se pronunciará, al mismo tiempo, sobre el fondo del asunto. En ningún caso el expediente será elevado al superior si no mediara apelación contra la resolución definitiva.

Art. 32. — Todas las providencias o resoluciones que no lleven la firma del director de trabajo o delegado regional, serán recurribles ante los mismos y sin forma de trámite.

CAPITULO VI

Ejecución

Art. 33. — Ejecutoriada la resolución dictada por la autoridad del trabajo y vencido el término para su cumplimiento, si los interesados no dedujeran la acción de ejecución de sentencia dentro de los dos meses de notificados, ésta se dictará de oficio por profesionales oficiales. En la Capital Federal conocerá en la ejecución el juez de paz letrado o de primera instancia en lo civil o comercial de acuerdo al monto y los respectivos fueros. En las provincias y territorios, ejercitándose esta acción por los interesados será competente la autoridad judicial que corresponda de acuerdo con la organización de la justicia ordinaria en la respectiva jurisdicción y ejercitándose de oficio por profesionales designados por la autori-

dad del trabajo, cualquiera sea el monto, intervendrá la justicia de primera instancia en lo civil o comercial, excluyéndose la de menor cuantía.

CAPITULO VII

Acción judicial

Art. 34. — Será juez competente para intervenir en los juicios de indemnización por accidente del trabajo en los casos autorizados por este decreto, el que corresponda de acuerdo con la organización de la justicia ordinaria en la respectiva jurisdicción, cuando la acción sea ejercitada directamente por los interesados. Cuando lo sea por profesionales designados por la autoridad del trabajo, el de primera instancia en lo civil o comercial competente de acuerdo con las mismas normas, en los casos que el de menor cuantía del asiento del profesional designado carezca de competencia para intervenir en el juicio.

Art. 35. — En todos los casos de juicios por indemnización de accidente del trabajo los jueces requerirán, bajo pena de nulidad, y dentro de los cinco días de deducida la acción, las actuaciones administrativas producidas, indicando fecha del certificado de reserva presentado por el actor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9º. Las actuaciones serán remitidas en el estado en que se encuentren, debiendo ser devueltas oportunamente con un testimonio de la sentencia definitiva.

Art. 36. — En los juicios de indemnización por accidente del trabajo, aun cuando la acción se basara en el derecho común por causa de dolo, culpa o negligencia patronal, los jueces no admitirán cesión, transacción o renuncia. La sentencia ordenará también en estos casos que el importe de la condena se deposite en la caja del artículo 9º de la Ley 9.688. Estos fondos serán entregados directamente a los titulares del derecho aun cuando hubiere mandatario con facultad de percibir.

Art. 37. — Los jueces sólo deducirán de la indemnización los anticipos que prescribe el artículo 8º, inciso d), de la Ley 9.688 y los que expresamente se hubiera autorizado en las actuaciones administrativas.

CAPITULO VIII

Medidas precautorias

Art. 38. — De oficio o a pedido de parte interesada, la autoridad del trabajo podrá solicitar judicialmente inhibición o embargo preventivo sobre los bienes del patrono o asegurador en las situaciones del artículo 3º, inciso 2º, o cuando el obrero o sus derechohabientes justificaran en las actuaciones administrativas que el patrono trató de enajenar u ocultar sus bienes. Podrá también requerirlo cuando existan indicios justificados de que por cualquier otro medio se pretenda defraudar los derechos de los beneficiarios o de la caja de garantía.

Art. 39. — Los jueces, verificados los recaudos a que se refieren los artículos anteriores, decretarán el embargo o inhibición requeridos con carácter preventivo y sin más trámites, dentro de las veinticuatro horas de solicitados, remitiendo en el día directamente oficio al Registro de Propiedad que corresponda. Salvo el caso de orden judicial, los embargos o inhibiciones decretados sólo se levantarán previo depósito de la suma por la cual hubieren sido solicitados, o prestando fianza real a satisfacción de la misma autoridad. El depósito se efectuará en el Banco de la Nación, a la orden de la autoridad del trabajo que hubiere pedido la medida y como pertenecientes a las actuaciones en que se originen, en pago o a las resultas del juicio correspondiente.

Art. 40. — El monto de la suma por la cual se deberá librar el mandamiento de embargo será estimado prudencialmente por la autoridad del trabajo que lo solicite, no pudiendo, en ningún caso, exceder del máximo legal.

CAPITULO IX

Asistencia médica

Art. 41. — El obrero tendrá la libre elección del médico pero el patrono o asegurador sólo responderá por los honorarios que fije la autoridad del trabajo que conozca el caso, salvo en aquellas jurisdicciones en que exista tarifa o arancel, en cuyo caso se aplicará. Si el patrono o asegurador no suministrare asistencia médica al accidentado, los honorarios del facultativo elegido por el obrero se fijarán de acuerdo con los principios corrientes, con pres-

cindencia, de los criterios estimativos señalados. Hasta tanto entren en vigencia las normas que prevé el artículo 45, existiendo disconformidad, se ilustrará el criterio de estimación de los honorarios con los informes que, siendo requeridos, estarán obligados a suministrar los facultativos oficiales o los establecimientos a que se refiere el artículo 23. Para fijar los gastos de farmacia originados por el tratamiento del accidentado, servirá de guía el decreto del Poder Ejecutivo nacional sobre precios máximos para especialidades medicinales, sin perjuicio de su estimación por el médico oficial.

Art. 42. — El patrono podrá informarse del estado del damnificado por intermedio de un facultativo de su confianza, quien tendrá derecho a examinarlo en presencia del médico que lo asista y en el lugar en que se preste la asistencia. Si el obrero se negara a admitir esta formalidad, comprobada su negativa por la autoridad del trabajo, podrá suspenderse el pago de la asistencia médica y farmacéutica.

Art. 43. — En caso de disconformidad entre ambos médicos, el patrono o compañía aseguradora deberá dar cuenta, dentro de las veinticuatro horas, por vía postal certificada o por telegrama, a la autoridad del trabajo. Su silencio se interpretará como una expresión de conformidad.

Art. 44. — El patrono o asegurador deberá satisfacer en tiempo oportuno los gastos hechos por el accidentado para proporcionarse asistencia médica y farmacéutica. Si los patronos y compañías de seguros pagaran directamente los honorarios de los profesionales interesados, lo pondrán oportunamente en conocimiento de la autoridad del trabajo, en salvaguardia de sus responsabilidades.

Art. 45. — La Secretaría de Trabajo y Previsión someterá, dentro de los sesenta días, al Poder Ejecutivo de la Nación un proyecto de tarifa de aranceles médicos para la asistencia facultativa de las accidentados del trabajo.

CAPITULO X Sanciones

Art. 46. — Las personas o entidades que de cualquier modo obstruyan el procedimiento, ya sea desacatando las resoluciones de la autoridad del trabajo o sus agentes, o falseando las informaciones que se le soliciten en forma ostensible o encubierta, o no respondan a los requerimientos, se harán pasibles de multas de veinte a mil pesos moneda nacional. En defecto del pago, se aplicará arresto de un día por cada veinte pesos de multa.

Art. 47. — Si la infractora fuese una empresa de seguros, la Secretaría de Trabajo y Previsión podrá disponer, en caso de reincidencia, la exclusión de la empresa en las tramitaciones administrativas y, según las circunstancias, solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la autorización para operar en contratos de seguros en los riesgos de accidentes del trabajo.

Art. 48. — No obstante lo dispuesto en este capítulo, la autoridad del trabajo puede hacer cumplir directamente sus resoluciones en los casos susceptibles de cumplimiento por la fuerza pública, cuyo concurso será prestado inmediatamente de ser solicitado, como si mediara requerimiento judicial.

Art. 49. — Para conocer en el procedimiento por infracciones previstas en este decreto, será competente la autoridad administrativa o judicial, con arreglo a las disposiciones existentes sobre la materia en cada jurisdicción.

CAPITULO XI

Disposiciones generales

Art. 50. — Las partes deberán fijar su domicilio en el lugar sobre el que ejerce jurisdicción la autoridad del trabajo respectiva. El domicilio que fijen en las actuaciones se tendrá por domicilio constituido y en él se notificarán las providencias que correspondan. La negativa de las partes a constituir domicilio será reprimida con las sanciones del artículo 46, sin perjuicio del procedimiento en rebeldía establecido por el artículo 52.

Art. 51. — Las notificaciones a las partes se harán en el domicilio constituido, siendo válidas las que se efectúen por carta certificada con aviso de retorno, telegrama recomendado, porédula, o por todo otro medio que acredite de modo fehaciente que la comunicación ha sido entregada en el domi-

cilio constituido. Asimismo, se estimará notificada la providencia existiendo constancia de que el interesado ha tenido conocimiento de la misma.

Art. 52. — Si la parte responsable de la indemnización no comparece o no responde a los requerimientos, será declarada rebelde. Esta providencia se notificará por medio fehaciente en el domicilio que constare en las actuaciones o en el que se establezca de oficio, prosiguiéndose el trámite hasta dictarse resolución.

Art. 53. — En cualquier estado, podrá tomar el rebelde la intervención que le corresponda, sin retrogradarse el procedimiento por esa circunstancia.

Art. 54. — Únicamente se tendrán por percibidas por los accidentados, sumas superiores a las de la indemnización temporaria, si fueron entregadas con autorización de la autoridad del trabajo y bajo los recaudos que ésta determine.

Art. 55. — En las actuaciones que se promuevan por accidentes fatales, se designará un funcionario que vigile los derechos que subsidiariamente pudieran corresponder a la caja de garantía.

Art. 56. — Los particulares, sean personas físicas o jurídicas, están obligados a proporcionar las informaciones de los hechos de que tuvieron conocimiento y que le fuesen requeridos. Se extiende esta obligación a la de comparecer personalmente cuando se considere necesario. Los infractores a lo dispuesto en este artículo se harán pasibles de las sanciones del artículo 46.

Art. 57. — La autoridad del trabajo queda autorizada para dirigirse directamente a los organismos administrativos de la Nación, provincias o municipalidades y reparticiones autárquicas, requiriendo informaciones o los servicios que correspondan a la naturaleza de sus funciones. Esta colaboración se organizará de manera permanente en los establecimientos que el secretario de Trabajo y Previsión considere más conveniente para la eficiencia de los servicios.

Art. 58. — La intervención de mandatarios en el procedimiento no obstará a que se requiera la comparencia de los interesados, toda vez que se estime con venga al esclarecimiento y decisión del caso.

Art. 59. — Aun cuando exista mandato con facultad de percibir, las cajas de accidentes y la garantía entregarán las indemnizaciones y sus rentas directamente a los titulares de las mismas, salvo el caso de representación necesaria.

Art. 60. — No obstará a la prosecución de los trámites establecidos en el presente decreto, la existencia de menores interesados quienes estarán representados por la autoridad del trabajo, con exclusión de toda otra intervención que no sea la que puedan tomar directamente quienes ejerzan la patria potestad o tutela del incapaz.

Art. 61. — La instancia administrativa que crea este decreto, interrumpe en todos los casos la prescripción de la acción emergente de la ley 9.688. Producida la situación del artículo 39, inciso 29, la prescripción empezará a correr nuevamente desde que el obrero o sus derechohabientes tomen conocimiento de la misma.

Art. 62. — Existiendo discrepancia entre la autoridad del trabajo y la judicial, o habiendo dudas respecto a quien debe conocer en un caso de accidente de trabajo, el punto será resuelto por el magistrado o tribunal que, de acuerdo a la organización de la justicia ordinaria de la jurisdicción respectiva, sea el superior del juez con quien se haya suscitado la cuestión. En este caso, sin otro trámite, la autoridad del trabajo elevará las actuaciones al superior que deba dirimir la cuestión. En la providencia de elevación, se citará este artículo, comunicándose la resolución al juez respectivo, quien también remitirá al superior lo actuado, dentro de las 24 horas de haber sido oficiado. Recibidos los antecedentes por el superior, dentro de los ocho días, lo devolverá a la autoridad, que deba proseguir, con la resolución que dirime el incidente, la que en la misma oportunidad será comunicada a la que resulte incompetente.

Art. 63. — Las cajas de acciones y de garantía pagarán las indemnizaciones o sus rentas, según corresponda, a los beneficiarios declarados en la resolución definitiva y firme, de la que se

remitirá copia autenticada por la autoridad del trabajo, sin otro requisito que el de la identificación del interesado.

Art. 64. — En las actuaciones administrativas de accidentes, no hay formas sacramentales que puedan acarrear nulidades, y en caso de existir vicios de procedimiento, ellos serán subsanados por el juez o tribunal que conozca en la apelación. El expediente será de vuelta a la autoridad administrativa únicamente cuando la sentencia se encuentre firme.

Art. 65. — Todos los términos que establece este decreto se ampliarán en razón de la distancia en la proporción de un día por cada cincuenta kilómetros.

Art. 66. — Para ser director de trabajo o delegado regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se requiere poseer título de abogado, con tres años de ejercicio en la profesión, como mínimo. Las personas que en la actualidad ocupan esos cargos, aun cuando no reúnan esas condiciones serán mantenidas en los mismos si han acreditado una preparación eficiente en la especialidad.

Art. 67. — El director de trabajo y delegados regionales, podrán delegar en otros funcionarios de su dependencia la atención del trámite y la firma de las resoluciones pertinentes, salvo las definitivas, las que pidan medidas precautorias, las que provean recursos, las que dispongan la expedición del certificado del artículo 99 y ordene iniciar acciones judiciales, todas las cuales son privativas o indelegables.

Art. 68. — Las disposiciones de este decreto son aplicables a los casos de enfermedades profesionales, en cuanto no se opusieren a su naturaleza.

Art. 69. — La instancia administrativa creada por este decreto será aplicada en la Capital Federal a los accidentes del trabajo ocurridos desde el 19 de Julio de 1944, y en las provincias y territorios nacionales en la fecha que para cada uno de ellos se establezca por resolución del secretario de Trabajo y Previsión, dentro del plazo máximo de seis meses.

Art. 70. — Deróganse las leyes, decretos y resoluciones nacionales y provinciales, en cuanto se opongan a las disposiciones del presente decreto.

Art. 71. — Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.

FARRELL
Juan Perón. — Alberto Teisaire.
— César Ameghino. — Diego I. Mason. — Orlando L. Peluffo. — Juan Pistarini. — Rómulo Etcheverry Boneo.

Art. 49. — Derógase, a partir de la promulgación de la presente ley, el decreto ley 21.425/44, debiendo tramitarse las acciones derivadas de la ley 9.088, de acuerdo al pronunciamiento que establece el decreto ley 32.347/44 de creación de los Tribunales del Trabajo, y por ante los tribunales que por el mismo se organicen.

Art. 59. — El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de substanciar el trámite administrativo que corresponda por las denuncias de accidentes del trabajo y acciones derivadas del cumplimiento de la ley 9.688, formuladas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión.

Art. 69. — Agrégase al artículo 86 del decreto 32.347/44, como segundo apartado, el siguiente: Cuando se trate de peritaje médico en accidentes del trabajo, los nombrados deberán ser médicos legistas diplomados o ser especialistas en traumatología.

Art. 79. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires a cinco de Febrero de mil novecientos cuarenta y siete.

J. H. Quijano Ricardo C. Guardo
Alberto Reales Rafael González

Por tanto:

Téngase por ley de la Nación, cumpilase, comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacional y archívese.
PERON. — Angel G. Borlenghi. — José M. Freire.

Ministerio de Obras Públicas

(Continuación de la pág. 3)

Art. 4° — Anotado en la Dirección General de Contabilidad, y Contralor de Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.
PERON. — Juan Pistarini.

Orden Integral de Pago N° 933. Ejercicio de 1946

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1946.

22.722/46. — 749. — Visto este expediente:

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1° — Cancelese el saldo de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con treinta centavos moneda nacional (\$ 44.486.30 m.n.), del Parcial N° 14 de la Orden de Pago Integral N° 562/46, a favor de la firma Enrique Daverio, acreditando dicho importe al Inciso 1°, partida 37 del Plan de Trabajos Públicos 1946.

Art. 2° — Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone o se gire según se establezca en las liquidaciones parciales, por la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Contaduría General de la Nación y a medida que reciba los correspondientes certificados, la suma de noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con treinta centavos moneda nacional (\$ 94.486.30 m.n.), a favor de:

Enrique G. Daverio
Escuela Técnica N° 4 - Construcción edificio ... \$ 94.486.30

Decreto N° 29.404 del 21/XI/46.

Art. 3° — Impútese la suma de noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con treinta centavos moneda nacional (\$ 94.486.30 m.n.), al Inciso 1°, partida 37 del Plan de Trabajos Públicos de 1946.

Art. 4° — De esa suma se irá reteniendo en concepto de garantía, fletes, multas u otras deducciones, los importes que se indicarán en las liquidaciones respectivas.

PERON. — Juan Pistarini.

Orden de Pago Nro. 948. — Ejercicio de 1946

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1946.

22.726/46. — 757. — Expediente número 24.916/46. — Visto este expediente,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1° — Entréguese a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios, la cantidad de sesenta y ocho mil seis pesos con sesenta y cinco centavos, mon. nac. (\$ 68.006.65 m.n.), en concepto del producido por el recargo correspondiente sobre las tarifas de tracción en los Puertos de la Capital, La Plata, Mar del Plata y Receptoría de Necochea, por el mes de Octubre de 1946, para responder al 12 o/o de Aporte Patronal, conforme a lo determinado por las Leyes Nros. 10.650 y 12.915 y Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 9 de Octubre de 1928, como sigue:

	m\$n.
Puerto de la Capital — Octubre/46 — Recargo del 20 o/o	59.214.71
Puerto de La Plata — Octubre/46 — Recargo del 10 o/o	7.769.49
Puerto de Mar del Plata — Octubre/46 — Recargo del 5 o/o	275.24
Receptoría Necochea — Octubre/46 — Recargo del 5 o/o	747.21
Total:	68.006.65

Art. 2° — Impútese la referida cantidad de sesenta y ocho mil seis pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional (\$ 68.006.65 m.n.), a la cuenta: "Puertos de la Capital y La Plata — Ley 10.650 — Decreto 300/26".

Art. 3° — Anotado en la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos.

PERON. — Juan Pistarini.